

Las platas perdidas de ProCultura

Los directivos de la fundación creada por Alberto Larraín y la fotógrafa Ilonka Csillag suman nuevas querellas en su contra, que buscan establecer el destino de los recursos que recibía la organización sin fines de lucro y que habrían sido utilizados para fines distintos a los que estaban destinados, acrecentado las sospechas de pagos políticos.

Por **Francisco Artaza y Esteban Gonzalez**

La mañana del pasado miércoles 9 de octubre, cuando efectivos de la Brigada Anticorrupción de la PDI llegaron a la casa de calle Bremen, en Ñuñoa, en la que vive el psiquiatra Alberto Larraín, lo hicieron con un objetivo claro en mente.

Quienes conocieron de la diligencia - que incluyó allanamientos simultáneos en Santiago y Concepción a las residencias de 14 ejecutivos de ProCultura - aseguran que, pese a que la policía ya había logrado incautar el 11 de julio de 2023, en las oficinas de la Fundación en calle Carmencita, comuna de Las Condes, la contabilidad y valiosos documentos sobre el funcionamiento de la entidad dirigida por Larraín, faltaban todavía algunas piezas para completar el puzle.

Por ello, cuando los policías traspasaron el portón verde e ingresaron a la vivienda de un piso y amplio jardín donde vive Larraín, portando una orden judicial de allanamiento e incautación, fueron de inmediato por los computadores, celulares, correos electrónicos y bases de datos.

En la documentación anexa que se encontró en servidores y almacenada en nubes informáticas se habría hallado infor-

mación adicional de pagos y transferencias que no estaba contenida en la contabilidad formal de la fundación creada en 2009 por el psiquiatra y la fotógrafa y gestora cultural Ilonka Csillag. Se trataría de nuevos antecedentes que podrían explicar el destino de los miles de millones perdidos de ProCultura.

La fundación ha estado en el foco de la atención desde que se autodenunció a mediados de junio de 2023, cuando recién estallaba en Antofagasta el caso Convenios que involucraba a la Fundación Democracia Viva. En medio de la agitación propia de las primeras indagaciones, los representantes de ProCultura reconocieron al fiscal de Antofagasta que ellos también habían suscrito convenios con el Minvu para el Programa de Asentamientos Precarios. El Minvu puso término a los convenios que tenía con ProCultura en Antofagasta, Valparaíso y Biobío, y solicitó judicialmente la restitución de cerca de \$609 millones que no fueron rendidos por la fundación de Larraín.

Pero eso marcaría solo el inicio en la caída de ProCultura. A la investigación por Asentamientos Precarios, la Fiscalía sumó la denuncia por el alto costo de un convenio -\$629 millones- suscrito con la Gobernación de Antofagasta para la pintura de

tres fachadas de edificios del casco histórico, que en total sumaban 4.200 metros cuadrados; un contrato con la Gobernación de Ñuble para la realización de un evento binacional con Argentina por 268 millones de pesos y en los que solo actuaron como intermediarios para la contratación de las empresas que terminaron ejecutando los servicios; un convenio de prevención del suicidio con el Gobierno Regional Metropolitano por \$1.700 millones de pesos. Y así suma y sigue. ProCultura también es indagado por un convenio suscrito con el gobierno regional de Magallanes por más de \$23 millones para la restauración de un mural y que su ejecución fue rendida por la empresa de un funcionario de ProCultura.

La investigación que sigue la Fiscalía contra la plana ejecutiva de ProCultura abarca los presuntos delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y lavado de activos. Por lo que ha puesto en aprietos los gobernadores Claudio Orrego (RM), Rodrigo Díaz (Biobío), Óscar Crisóstomo (Ñuble) y Jorge Flies (Magallanes). Este último volvió a la palestra esta semana, luego de que se difundieran mensajes por chat de 2022 en los que Alberto Larraín le dice que habló con el Presidente Boric y le pide apurar proyectos en la zona. Una mención que reflojó los nexos políticos de Larraín, quien

milító en la DC hasta 2018, donde fue cercano a Orrego y a Carolina Goic, para luego vincularse al FA y al propio Boric, a quien asesoró en 2019 y 2021 en temas legislativos sobre salud mental.

Para La Moneda el caso ProCultura ha sido un permanente dolor de cabeza, del que no han podido desprenderse, y es que la cuestionada fundación tuvo un crecimiento explosivo en los contratos suscritos con la llegada del nuevo gobierno. Si en 2021 sumó convenios con instituciones gubernamentales por \$316 millones de pesos, en 2022 estos ascendieron a \$3.282 millones.

La exposición de figuras políticas en el caso y los últimos allanamientos decretados por el fiscal de Coquimbo, Patricio Cooper, quien acumuló las diversas aristas del caso ProCultura, fueron clave para empujar a la empresa minera Anglo American a presentar el lunes 15 de octubre una querrela por estafa en contra de quienes resulten responsables por la no rendición de cerca de \$290 millones, de un total de 405 millones de pesos, entregados a ProCultura bajo la ley de donaciones.

Se trata de cinco convenios suscritos entre 2021 y 2023 destinados a beneficiar el desarrollo socioeconómico de las comunidades de las zonas donde la compañía tie-



► Alberto Larraín, el psiquiatra que fundó ProCultura. Su idea cerró en noviembre del 2023.

ne proyectos mineros y en los cuales ProCultura, según señala la querrela de la gigante trasnacional, "ha omitido cualquier información verosímil sobre el estado de ejecución de estas iniciativas, como tampoco se ha indicado el destino que tuvieron los fondos entregados para la ejecución de estos proyectos". Según el libelo de Anglo American, desde el 2 de mayo intentaron en múltiples ocasiones comunicarse con ProCultura para obtener información, pero "nunca existió disposición de la querrelada para aclarar el estado de ejecución de los proyectos o explicar el destino de los fondos que le fueron entregados".

La decisión de la gigante transnacional minera de querrellarse, afirman abogados que conocen de las aristas del caso, más allá de buscar responsabilidades y recuperar el dinero, se cimenta en la sospecha de que ProCultura a partir del 2021 comenzó a utilizar el dinero de los proyectos para pagar sueldos de su cada vez más extensa

planilla de trabajadores y financiar así otros programas que levantaban en otras regiones. En el fondo, señalan las fuentes, la trasnacional buscaría colocar un dique y separar aguas de ProCultura para no verse eventualmente afectada en su compliance de las estrictas normas anticorrupción por tener a un proveedor que está siendo investigado. De paso buscan dejar de manifiesto que las donaciones que realizó la empresa no guardan relación con eventuales decisiones adoptadas por autoridades políticas que hayan beneficiado a proyectos de la compañía minera.

Las dudas apuntan directamente al uso de platas políticas, algo que busca esclarecer la Fiscalía y ahora también una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la que se constituyó después de que se filtrara un informe pericial de la PDI a las cuentas de ProCultura en el que figuran cinco abonos por un total de \$4.647.500 realizados por la expareja del Presidente Ga-

briel Boric, la socióloga Irina Karamanos, entre el 2 de agosto de 2021 y el 3 de enero de 2022.

Pese a que Karamanos negó esos depósitos, lo que llamó la atención fue el hecho de que en las cuentas de ProCultura aparecieran como abonos y no gastos por sueldos, ya que ella trabajó para un programa que ProCultura suscribió con el Ministerio de Cultura entre mayo de 2021 a febrero de 2022, por un monto de \$973.500 mensuales.

Las dudas sobre el verdadero uso que daba ProCultura a las millonarias sumas de dinero que recibía de manos de instituciones públicas y privadas, y que "bicicleteaba a otros fines", eran un secreto a voces hace varios meses.

En julio de 2023 al menos hubo una primera alerta que se pasó por alto.

¿Qué pasó con las platas del Gore?

"Empezamos a darnos cuenta de que

había problemas con ProCultura en julio de 2023. Tuvimos varias reuniones con Alberto Larraín donde él nos pide a las seis fundaciones que estábamos ejecutando el proyecto Quédate que nos hiciéramos cargo del pago de la extensión de las pólizas de seguro", relata Emanuel Pacheco, director ejecutivo de la Fundación Katy Summer, sobre las situaciones anómalas que vivieron ellos y otras cinco fundaciones que durante 11 meses ejecutaron el Programa Quédate del Gore Metropolitano destinado a la prevención del suicidio.

Se trataba de un proyecto piloto de más de 1.600 millones de pesos que el Gore adjudicó a ProCultura por trato directo, modalidad recurrente en los convenios que suscribió la fundación que dirigía Larraín con diversas entidades gubernamentales. De esa cifra, ProCultura solo rindió \$600 millones. Aún no se sabe qué pasó con los